

Así lo decretaron por mayoría de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Arza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis Malanco*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio 26 de 1871.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.—Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por los indígenas de Huiramba, Cristóbal y Faustino Rangel y otros, por creer que el Prefecto Político de Morelia ha invadido las facultades del poder Federal al repartir entre los miembros de la comunidad de dicho pueblo, los terrenos que poseian proindiviso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Algunos indígenas de Jesus Huiramba piden amparo de garantías, por virtud de incluirse por la Prefectura de esta ciudad conforme á la disposicion del Gobierno del Estado, en el reparto de terrenos, algunos que habian antes sidoles adjudicados por la misma Prefectura, conforme á la ley de 25 de Junio.

En primer lugar advierte este ministerio, que el C. Prefecto, segun aparece de las presentes diligencias, no obró arbitrariamente; pues no hizo mas que cumplir una disposicion de su superior, como lo es el Ejecutivo del Estado; y en consecuencia, en caso de que alguna responsabilidad existiera, seria del Gobierno del mismo, mas nunca del Perfecto; y el amparo deberá pedirse, por tanto, contra la superioridad que dió la determi-

nacion, mas no contra el Gefe Político que no hizo mas sino que ejecutarla.

En segundo lugar, que la determinacion del Gobierno no viola ninguna de las garantías que otorga la Carta fundamental de la República, y por tanto, aun cuando el amparo se pidiera por los procedimientos del Gobierno, no tendria lugar aquel.

Lo que se vé claramente es, que los indígenas quejosos pretenden ser de mejor condicion que los demas, pues pretenden ser dueños de los terrenos que designan, y ademas hacer que en el reparto se les considere con otros, y así enriquecer de una manera odiosa.

Esto no es equitativo; y las leyes generales, si bien han querido favorecer á la clase indígena en general, no han pretendido hacer bien á unos con perjuicio de los otros, pues esto daria márgen á rencillas entre ellos mismos, y á desagradados lamentables y de trascendencia.

Siendo, pues, la determinacion del Gobierno del Estado justa y equitativa; no atacándose con ella ninguna garantía Constitucional, y no siendo el amparo pedido contra el Gobierno, sino contra el C. Prefecto, el cual no aparece que haya obrado de una manera arbitraria, pues antes bien, para no hacerlo así, ocurrió al Gobierno consultándole sobre lo que deberia hacer; el Promotor Fiscal pide se declare por vd. que la Justicia de la Union no ampara á Cristóbal y Faustino Rangel, Juan Gallegos, Andres y Donaciano Tapia, Joaquin Montañez, Sacramento Cruz, Anacleto Montañez, Victoriano Mendez, María Gregoria de la Cruz y Antonia García, de los procedimientos del C. Prefecto de esta ciudad, por virtud de las razones expresadas.

Morelia, Junio 23 de 1872.—*Mariano de Jesus Torres.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Julio 3 de 1872.—*Isidro Aleman.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Morelia, Julio 1º de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por los indígenas de Huiramba Cristóbal Rangel, Faustino Rangel, Juan Gallegos, Joaquin Montañez, Victoriano Mendez, Anacleto Montañez, Gregoria Cruz, Antonia García, Andres Tapia y Sacramento Cruz, contra el C. Prefecto de esta Capital, por creer que esta autoridad ha invadido las facultades del poder Federal, al repartir entre los miembros de la misma comunidad del pueblo citado los terrenos que poseían proindiviso; el informe de la autoridad responsable; lo pedido por el Ministerio público y cuanto mas consta de autos y:

Considerando: que el hecho que motiva la queja, suponen los peticionarios que es una invasion de atribuciones ó facultades de la autoridad Federal, porque con anterioridad al reparto de los terrenos de la comunidad de indígenas de Huiramba, acordada por el Gobierno del Estado, y practicada por su orden por la Prefectura de Morelia, habían aquellos denunciado y se les habían adjudicado algunos terrenos de dicha comunidad, excedentes en valor al señalado en las leyes relativas de nacionalizacion y distribucion de bienes de esta naturaleza. Considerando que el procedimiento de la Prefectura en cumplimiento de una resolucion del Gobierno del Estado no envuelve de ninguna manera el ataque ó invasion atribuida por los quejosos; primero, por que la autoridad responsable no procedió de motu proprio, sino en virtud de órdenes superiores que debía obedecer y en cuya calificacion no podia ni debía entrar por la naturaleza misma de las funciones que ejerce, como mera ejecutora de las disposiciones gubernativas, siendo el Gefe del Estado que las dictó el único responsable de ellas en caso de extralimitacion de sus facultades: segundo, porque los peticiona-

Tomo III.—Parte II.

rios no han dirigido su queja contra el Gobierno del Estado, origen del acto reclamado, y el solo que tendria que responder de él, en caso de invasion de facultades del poder Federal.

Considerando: que aun cuando contra aquel funcionario se hubiera formulado la queja, habria obrado dentro del círculo de sus atribuciones, primero, porque el acto de la adjudicacion alegado por los quejosos aun no estaba consumado, puesto que ellos mismos confiesan que no se les habían expedido todavía los títulos de aquella, ni puéstoles aun en posesion de los terrenos denunciados: segundo, por que la adjudicacion no pudo hacerse sino de terrenos, cuyo valor no excediese de doscientos pesos, conforme á lo prevenido en la circular de 9 de Octubre de 1856, puesto que los denunciantes hacian uso de este derecho como individuos de la comunidad, que poseían aquellos á una con los demas miembros de ella, y puesto tambien que la disposicion citada quiso que los terrenos de indígenas se repartiesen con igualdad proporcional entre todos ellos, y expresamente previene que los terrenos que se adjudiquen no exceda su valor de doscientos pesos, para evitar se perjudicase el derecho de los demas partícipes.

Considerando, en fin, que en el acto practicado por la Prefectura y ordenado por el Gobierno del Estado, se obsequiaron las disposiciones de la circular citada de 9 de Octubre de 1856 y 2 de Mayo de este año; y que si hubo en él innovaciones que lastimaron los intereses de los quejosos, estas no envuelven de ningun modo, ni bajo una inteligencia jurídica, invasion de facultades del poder Federal; como pide el C. Promotor y con fundamento del artículo 101 de la Constitucion general y de los 1º, 4º, 13, 16 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se declara:

1º La Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos contra la provi-

dencia del C. Prefecto de esta ciudad, que repartió entre los indígenas de Huiramba los terrenos de comunidad de aquellos, por no haber en este acto invasión alguna del poder Federal.

2º No ha lugar á aplicar á los interesados la multa del artículo 16 citado, por su notoria insolvencia.

3º Hágaseles saber este fallo y remítanse copias de él á quienes correspondan; dándose cuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Definitivamente juzgando lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan: doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Julio 3 de 1872.—*Isidro Aleman*, escribano público.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 11 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por Cristóbal y Faustino Rangel, Juan Gallegos, Andres y Donaciano Tapia, Joaquín Montañez, Sacramento Cruz, Anacleto Montañez, Victoriano Mendez, María Gregoria de la Cruz y Antonio García, contra el Prefecto Político de Morelia como ejecutor de la disposicion del Gobernador del Estado, fecha 1º de Junio último, relativa á la consulta sobre el modo de distribuir los terrenos que se han adjudicado á los vecinos del pueblo de Huiramba, respecto de lo que el Gobernador resuelve que el valor de todos los terrenos que conforme á la ley de 25 de Junio se adjudiquen á los indígenas que lo soliciten, debe entraren la masa comun de los bienes repartibles, para que al procederse al reparto, la comision repartidora hagalas aplicaciones correspondientes entre cada uno de los miembros de la co-

munidad, conforme á lo dispuesto en la ley de 13 de Diciembre de 1851. Considerando: que en el expediente aparece, que los terrenos de que se trata están adjudicados de antemano con arreglo á las disposiciones de la materia, y que por lo mismo no son ya terrenos comunes sino de la propiedad particular de los adjudicatarios, y que en tal virtud la disposicion que manda comprenderlos en la distribucion de los terrenos comunes ataca la garantía consignada en el art. 27 de la Constitucion federal, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada el primero del actual por el juez de Distrito de Michoacan que declara, que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos contra la providencia del C. Prefecto de esa Ciudad que repartió entre los indígenas de Huiramba los terrenos de comunidad de aquellos. En consecuencia, la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos contra la disposicion del Cefe Político de Morelia, para ejecutar lo resuelto en el caso por el Gobernador del Estado de Michoacan.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*. — *Juan J. de la Garza*.—*Ignacio Ramirez*. — *J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Arza*. — *S. Guzman*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 15 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.